LEY 19.549

ESTADO-ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-DERECHO PROCESAL-

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Bs.As., 3/4/1972

B.O. 27/4/1972

V. Antecedentes Normativos

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Título I

Procedimiento administrativo: ámbito de aplicación.

ARTICULO 1º.- Ámbito de aplicación.

- a) Las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a:
 - (i) La Administración Pública nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales;
 - (ii) Los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan actividad materialmente administrativa.
- b) También se aplicarán, en forma supletoria los títulos I, II y III a:
 - (i) Los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a personas privadas, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales;
 - (ii) Los procedimientos administrativos propios de las empresas que se desarrollen en los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) precedente.
- c) La presente ley no se aplicará a la Regida del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria, en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en este inciso c), así como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado nacional, no regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público.
- d) La presente ley será de aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad, salvo en las materias regidas por leyes especiales y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculadas a la disciplina y al desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos.

(Artículo sustituido por art. 24 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

- a) Tutela administrativa efectiva: los administrados tienen derecho a una tutela administrativa efectiva, que comprende la posibilidad de:
 - (i) Derecho a ser oído: defender sus razones de su pretensión y antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos o a sus intereses jurídicamente tutelados, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma exprese permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planten o deban cuestiones jurídicas.
 - (ii) Cuando fuera exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser completado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los respectivos actos.
 - (iii) Derecho a ofrecer y producir pruebas: de ofrecer y producir, si fuere pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la prueba que deba producirse, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. Todo ello deberá realizarse bajo el oportuno control de los interesados y sus profesionales, quienes además podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.
 - (iv) Derecho a una decisión fundada: que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, entre ellas la prueba producida, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.
 - (v) Derecho a un plazo razonable que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión expresa y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
 - (vi) Impulsión e instrucción de oficio: la Administración deberá impulsar e instruir de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones.
 - (vii) Celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. Gravedad: los recursos y los reclamos administrativos deberán tramitarse y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de recursos o reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo nacional.
 - (viii) Los trámites administrativos, incluyendo los recursos, reclamos y demás impugnaciones, serán gratuitos, sin perjuicio de la obligación del interesado de sufragar los honorarios que pudieren corresponder a sus letrados y representantes y a los peritos que él proponga. Tanto la Administración como los administrados deberán obrar con buena fe y lealtad en el trámite de los procedimientos.
 - (ix) Eficiencia burocrática: los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
- b) La Administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales o mediante consulta a las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto.
- c) Cuando se trate de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez (10) días a contar desde la solicitud.
- d) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.
- e) Días y horas hábiles: los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlos.
- f) Los plazos: en cuanto a los plazos:
 - (i) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración.
 - (ii) Se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario articulado en el presente artículo.
 - (iii) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación, en la que deberá hacerse saber al interesado los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo dentro del cual deberán articularse los mismos o, en su caso, si el acto agota la instancia administrativa. La omisión total o parcial de éstos recaudados determinará automáticamente la invalidez e ineficacia de las notificaciones.
 - (iv) Cuando no se hubiere establecido un plazo para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de notificaciones e emplazamientos y constatación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.
 - (v) Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, en caso de interposición de recurso que deban ser resueltos por un órgano superior del que dictó el acto, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. La omisión del cumplimiento de este plazo se considerará falta grave del funcionario que deba proceder a dicha elevación. Toda elevación de actuaciones será notificada a las partes del procedimiento.
 - (vi) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fuere mediano y satisfactoriamente fundado y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por el mismo con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado; en caso contrario, el plazo mediano automáticamente prorrogará hasta dos (2) días después de que se haga efectiva la notificación de la misma respecto de la prórroga.
 - (vii) Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la solicitud de vista de las actuaciones producirá la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos, o promover acciones y recursos judiciales, salvo de prescripción, desde el momento en que se presente la solicitud, y se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.
 - (viii) Cuando las normas no fijen un plazo máximo para resolver, éste será de sesenta (60) días, una vez que esté en condiciones de ser resuelto por el órgano competente.
 - (ix) En todo caso, se informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que los pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
- g) Interposición de recursos fuera de plazo. Denuncia de legitimidad: una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la denuncia de legitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excesadas razonables pautas temporales (ta que en ningún caso podrán exceder ciento ochenta (180) días desde la fecha de notificación del acto), se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
- h) Interrupción de plazos por articulación de recursos administrativos o acciones judiciales: la interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieren sido mal calificadas, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente. Los efectos interruptivos permanecerán hasta que adquieran firmeza en sede administrativa, según corresponda; (a) el acto administrativo que ponga fin a la cuestión; (b) el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo; o (c) el acto administrativo que haga lugar al pedido de nulidad absoluta del procedimiento o del derecho.

Igual efecto producirá la interposición de recursos o acciones judiciales, aunque fueren deducidos ante tribunal incompetente.

- i) Férreas de derecho no ejercido en plazo: la Administración podrá dar por decayido el acto no ejercido dentro del procedimiento, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según sus estados y sin retrotraer etapas que no se tratase del supuesto a que se refiere el párrafo siguiente.
 - (i) Caducidad de los procedimientos: transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al interesado debidamente comprobada, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivaré el expediente.
- Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a revisión social y los que la Administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.

(Artículo incorporado por art. 25 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Procedimientos especiales excluidos.

ARTICULO 2.- Dentro del plazo de CIENTO VEINTE días, computado a partir de la vigencia de las normas procesales a que se refiere el artículo 1, el PODER EJECUTIVO determinará cuáles serán los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Queda asimismo facultado para: Pautar adaptación de los regímenes especiales al nuevo procedimiento.

- a) sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estrictamente procesal de los regímenes especiales que subsistan, con mira a la paulatina adaptación de éstos al sistema del nuevo procedimiento y de los recursos administrativos por el implantados, en tanto ello no afectare las normas de fondo a las que se refieren o apliquen los citados regímenes especiales.

La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan.

- b) dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos militares y de defensa y seguridad, a propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la presente ley y su reglamentación.

Actuaciones reservadas o secretas.

- c) determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o secretas las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deben tener ese carácter, aunque estén incluidos en actuaciones públicas.

Título II

Competencia del órgano.

ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Se ejercerá como una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuviere expresamente autorizada; la asociación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.

Cuestiones de competencia.

ARTICULO 4.- El Poder Ejecutivo o el Jefe de Gabinete de Ministros cuando aquél lo requiera, resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos departamentos de Estado.

(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Contiendas negativas y positivas.

ARTICULO 5.- Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se declare incompetente, remitirá las actuaciones a la autoridad que reputare competente; éste, a su vez, las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se consideraren competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla.

La decisión final de las cuestiones será de competencia de los órganos que, en ambos casos, dictar resolución que el dicamen del servicio jurídico correspondiente y si fuese de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para la remisión de actuaciones serán de DOS días, por lo que, para producir dictámenes y otros trámites, deberá iniciarse el trámite de la cuestión con un día de anticipación.

Rescusación y excusación de funcionarios y empleados.

ARTICULO 6.- Los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causas y en las oportunidades previstas en los artículos 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo dar intervención al superior inmediato dentro de los DOS días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admite la causal y seisa fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los CINCO (5) días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de los funcionarios y empleados se regirá por el artículo 30 del Código árriba citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los CINCO (5) días. Si se agotara la excusación se nombrará reemplazante; a la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán recurribles.

Título III

Requisitos esenciales del acto administrativo.

ARTICULO 7.- Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

- a) Debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia;
- b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;
- c) El objeto debe ser cierto, físico y jurídicamente posible; debe decirse todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;
- d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas especiales, se incluyen en estos últimos (i) el respectivo a la tutela administrativa efectiva de quienes padezcan verse afectados por el acto de alcance particular en sus derechos o intereses jurídicamente tutelados; y (ii) el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del procedimiento.
- e) Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, los recaudos incluidos en el inciso b) del presente artículo;
- f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulta de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Además, que el acto involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

(Artículo sustituido por art. 27 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Forma.

ARTICULO 8.- El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ya sea en forma gráfica, electrónica o digital; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

El acto que carezca de firma no producirá efectos jurídicos de ninguna especie. Lo mismo ocurrirá con el que carezca de forma escrita salvo que las circunstancias permitieren utilizar una forma distinta.

La reglamentación establecerá las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetará la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos.

(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

ARTICULO 8 bis.- En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que regards el a información adecuada, veraz e imparcial y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundamentadas las opiniones vertidas en el consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en virtud de economía, sencillez y celeridad.

(Artículo incorporado por art. 29 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Vías de hecho

ARTICULO 9.- La Administración se abstendrá:

- a) De llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas de derechos o intereses jurídicamente tutelados;
- b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, que habiéndose resuelto no recurrió administrativamente, no hubiere sido notificado;
- c) De establecer mecanismos informales o de otra naturaleza que, mediante la emisión de alternativas u otros defectos o errores técnicos, tergicen por efecto práctico impugnable conductas que no están legalmente prohibidas;
- d) De imponer por sí mismas que por su naturaleza exijan la intervención judicial previa, tales como embargos, allanamientos u otras de similares características sobre el domicilio o los bienes de los conductores.

(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Silencio o ambigüedad de la Administración.

ARTICULO 10.- El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Cuando se tratase de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretará como negativa. Sólo mediante disposición expresa podrá confirmarse al silencio sentido positivo.

Si la norma especial no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, esse no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que correspondiera, el interesado podrá por configuración del silencio de la Administración.

Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, el vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma especial aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no se aplicará este inciso.

Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 31 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Eficacia del acto. Notificación y publicación.

ARTICULO 11.- Para que el acto administrativo de alcance particular adquiere eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no hubieren perjudicado por el derecho de tercero.

Los actos de alcance general rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que en ellos se determine.

(Artículo sustituido por art. 32 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria.

ARTICULO 12.- El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigeren la intervención judicial.

La Administración sólo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes, sin intervención judicial, cuando deba progresar el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población o, en el caso de las Fuerzas Policiales o de Seguridad, ante la comisión de delitos flagrantes.

Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenden su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundamentamente una nulidad ostensible o absoluta.

(Artículo sustituido por art. 33 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Retroactividad del acto.

ARTICULO 13.- El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no lesionen derechos adquiridos- cuando se dicte en sustitución de otro revocado o cuando favoreciera al administrado.

Nulidad.

ARTICULO 14.- El acto administrativo es de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

- a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por:
 - (i) Error esencial;
 - (ii) Dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos;
 - (iii) Violencia física o moral ejercida sobre el funcionario que lo emitió;
 - (iv) Simulación o
 - (v) Una grave defecio en la formación de la voluntad de un órgano colegiado.
- b) Fuere emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo.

En el caso de la incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencia, la nulidad es relativa, salvo que se tratase de competencias excluyentes asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial:

- (i) Caricere de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado;
- (ii) Su objeto no fuere cierto, físico o jurídicamente posible, o conforme a derecho;
- (iii) Se hubiere omitido la audiencia previa del interesado cuando ésta es requerida o se hubiere incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable o
- (iv) Se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder.

La sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad; siempre que el interesado a quien el acto beneficiaba no hubiere incurrido en dolo.

(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Anulabilidad.

ARTICULO 15.- El acto administrativo es de nulidad relativa, y sólo será anulable en sede judicial, si presenta un defecto o vicio no previsto en el precedente artículo 14. Las irregularidades u omisiones no esenciales no dan lugar a nulidad alguna.

La sentencia que declare la nulidad relativa tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el acto fuere favorable al particular y éste no hubiere incurrido en dolo.

(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias.

ARTICULO 16.- La invalidez de una cláusula accidental o accesorias de un acto administrativo no importará la nulidad de este, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.

Revocación del acto nulo.

Artículo 17.- El acto administrativo de alcance particular, del que hubieren nacido derechos sustanciales a favor de los administrados, no puede ser revocado, sustituido o modificado en sede administrativa una vez notificado.

Tanto el acto administrativo regular como irregular podrán ser revocados, modificados, sustituidos o suspendidos de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación, sustitución o suspensión de dicho acto beneficiara sin causar perjuicio a terceros, si se acreditara dolo del revocado o si el derecho se hubiere otorgado expresamente y válidamente en forma expresa.

También podrá ser revocado, sustituido o suspendido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos, de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización comprenderá el lucro cesante debidamente acreditado.

(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Revocación del acto regular.

ARTICULO 18.- Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños económicamente sufridos por sus titulares.

(Artículo sustituido por art. 37 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Saneamiento.

ARTICULO 19.- El acto administrativo afectado por vicios que ocasionen su nulidad relativa puede ser saneado mediante:

- a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado;
- b) Confirmación, sea por el órgano que dictó el acto, sea por el órgano que debió dictar el acto o haberse pronunciado antes de su emisión, subsanando el vicio que lo afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación solamente cuando ello favorezca al particular sin causar perjuicio a terceros.

(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Conversión.

ARTICULO 20.- Si los elementos volitivos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiendo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.

Caducidad.

ARTICULO 21.- La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.

Prescripción.

(Nombre de la sección sustituido sustituido por art. 39 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

ARTICULO 22.- El plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de diez (10) años en caso de nulidad absoluta y de dos (2) años en caso de nulidad relativa, desde notificado el acto.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley N.º 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Título IV

Impugnación judicial de actos administrativos.

ARTICULO 23.- El administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados podrá impugnarlo judicialmente cuando:

- a) El acto de alcance particular:
 - (i) Revisa calidad de definitivo;
 - (ii) Impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión;
 - (iii) Se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso d) de este artículo;
 - (iv) La Administración violare lo dispuesto en el artículo 9º.
- b) En los supuestos de los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa salvo que:
 - (i) La impugnación se base exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica;
 - (ii) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil;
 - (iii) Se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente;
 - (iv) Se tratase de actos que fueren dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia. En la medida en que tales contrario a lo que establece el artículo 9º de